



Expediente: 001-042442

Nombre: FUNDACION CIUDADANA CIVIO

NIF: G86361862

Correo electrónico: [REDACTED]

Con fecha 16 de abril de 2020 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por la persona indicada en el encabezado de esta resolución, solicitudes que quedó registrada con el número 001-042442:

“Dada la redacción de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, me gustaría saber:

¿Cómo está afectando a las solicitudes de acceso a la información? Y, en concreto, tanto para aquellas iniciadas antes del estado de alarma y durante:

- ¿Se están tramitando solicitudes de información? ¿Todas?

- Si es así, ¿los plazos siguen siendo los mismos?

- Si no es así, ¿cuáles sí?

- Si ninguna se está tramitando, ¿cómo se justifica la anulación del derecho de acceso a la información cuando se trata de un trámite que beneficia al ciudadano?”

Con fecha 20 de abril de 2020 esta solicitud se recibió en la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto para su resolución en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.



Analizada la solicitud, esta Dirección General de Gobernanza Pública esta Dirección General de Gobernanza Pública resuelve lo siguiente:

Primero. Se acuerda continuar con la tramitación del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dado que el contenido de la solicitud del interesado está estrechamente vinculado a los hechos justificativos del estado de alarma.

Segundo. Se concede el acceso a la información y se resuelve la misma en los siguientes términos:

Durante el estado de alarma todas las personas pueden seguir presentando solicitudes de acceso a la información pública, tanto a través de la sede electrónica del Portal de la Transparencia como mediante el resto de formas previstas en la legislación.

La aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, supone que la suspensión decretada afecta a los plazos de todos los procedimientos administrativos, incluidas las solicitudes de acceso a la información pública.

No se trata de anulación del derecho de acceso sino de suspensión de los procedimientos administrativos. Al tratarse de suspensión, los plazos procedimentales quedan suspendidos en el momento de la declaración del estado de alarma, reanudándose por el período que restare cuando desaparezca dicho estado de alarma, inicial o prorrogado, sin que en ningún caso vuelvan a empezar desde cero. Es decir, los plazos se “reanudan” pero no se “reinician”.

La suspensión de los procedimientos referidos no vulnera el derecho de acceso a la información pública, pues lo que hace la medida -excepcional y transitoria, adoptada por razones de política sanitaria, para coadyuvar a la consecución de las medidas para combatir la crisis sanitaria- es demorar la tramitación del procedimiento, suspendiéndolo y previendo expresamente su reanudación una vez desaparezca el estado de alarma, de modo que ningún derecho subjetivo ni interés legítimo resulta lesionado por la mera suspensión.



Por otro lado, las excepciones a la regla general de suspensión de los procedimientos administrativos tramitados por las entidades del sector público son las enumeradas, con carácter taxativo, en la propia disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, apartados tres y cuatro, en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y que, en todo caso, exigen que la continuación de los procedimientos sea acordada motivadamente por el órgano competente.

Entre el 14 de marzo de 2020, fecha de promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el momento presente se han seguido, por ello, recibiendo solicitudes de acceso a la información pública.

Desde la declaración del estado de alarma se han finalizado expedientes de acceso a la información pública:

- De esos expedientes finalizados durante el estado de alarma algunos corresponden a solicitudes recibidas durante el estado de alarma (la mayor parte "finalizaciones anticipadas: expedientes erróneos, preguntas idénticas recibidas varias veces por la misma Unidad de Información de Transparencia (UIT) y algún expediente finalizado mediante resolución expresa de inadmisión por la disposición adicional primera, apartado primero, de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre: el solicitante es interesado en el procedimiento cuya información requiere).
- La mayoría de los expedientes finalizados durante los primeros días del estado de alarma corresponden a procedimientos en curso antes de la declaración del estado de alarma.

En relación con el resto de solicitudes, las UIT y los centros directivos están trabajando en la tramitación interna de las solicitudes para evitar que se produzca acumulación y para estar en disposición de responder lo antes posible, una vez termine el estado de alarma.

Además, las UIT también están valorando la aplicación de las excepciones previstas en los apartados tercero y cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para poder finalizar la tramitación de determinadas solicitudes mediante la correspondiente resolución.



Cabe señalar también que el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado sigue funcionando con normalidad en la parte relativa a publicidad activa y en él se publica mensualmente toda la información estadística referida tanto al acceso al propio Portal como a los datos sobre el ejercicio del derecho a la información pública, y así lo seguirá haciendo durante estos meses. Dichas estadísticas son accesibles a través del siguiente enlace:

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Portal-en-cifras.html

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.

A estos plazos les será de aplicación lo dispuesto en las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y, en su caso, lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias, en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

La Directora General de Gobernanza Pública

[Firma]